

aduanales, espedidos á solicitud de los interesados por la Tesorería general de rentas del Estado, y por los CC. Admor. y Contador de la Aduana marítima, no podían ser gravados con el repetido impuesto establecido por la Ordenanza municipal sin contrariar la fracción 9ª del art. 72 y fracción 1ª del 112 de la Constitución federal, así como las leyes generales de 1ª de Mayo de 1868, 7 de Enero de 1869 y el art. 78 del Arancel de aduanas marítimas de 1ª de Enero del año próximo pasado.

Considerando: que si conforme á la Constitución y leyes citadas, no puede fundarse la legalidad del cobro que se exige á los promoventes, ese derecho municipal que se impugna, no ha podido ser claro é indudable, ni ha debido tener lugar en consecuencia, "ninguna providencia coactiva" como espresamente ordena el mencionado artículo 3º de la ley de 20 de Enero de 1867, no obstante la autorización que conceden á los Ayuntamientos de Sinaloa para decretar los arbitrios necesarios, los arts. 57 y 58 de la Constitución del Estado; y de consiguiente, los procedimientos del Tesorero municipal de Mazatlan constituyen una violación en las personas de los quejosos, de la garantía que reconoce el art. 16 de la Constitución de la República.

Por lo espuesto, y con fundamento de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente:

Se confirma la sentencia pronunciada en Mazatlan á 22 de Setiembre último por el Juez de Distrito, declarándose: que la Justicia de la Unión ampara y protege á los Sres. Melchers, sucesores, contra el cobro de setecientos treinta y tres pesos setenta y ocho centavos, que se les exige en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza municipal de Mazatlan sobre los efectos que se introdujeron á ese puerto, de simple tránsito y á la consignación de los mismos Sres. Melchers.

Devuélvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada de esta senten-

cia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los C.C. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Najera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Enrique Landa,* secretario.

Es copia que certifico. México, Noviembre 25 de 1873.—*Enrique Landa,* secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla por la Señora Doña Joaquina Martínez, contra la órden del C. Gefe político, que previno al C. Juez menor Vicente Aguilar, la suspensión de la ejecución de la sentencia que recayó á favor de la quejosa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

La queja que ha elevado ante V. la promovente, está en manos del Juez que conoció en ese negocio, y á él toca determinar lo conveniente sobre las escepciones de la Gefatura política para enervar el pago de la cantidad á que salió sentenciado el diurno ó diurnos de que se habla en el ocurso. Así pues, el presente recurso no procede, por no poderse admitir en los negocios judiciales, según el artículo 8º de la ley de 20 de Enero de 1869. Con fundamento de este artículo, el Promotor pide á V., deseche el amparo interpuesto por Doña Joaquina Martínez, no condenándola en la multa que pre-

viene la ley, por ser notoria su insolvencia.

Puebla de Zaragoza, 6 de Setiembre de 1873.—*E. Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla, Noviembre 12 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por María Joaquina Martinez, contra la Orden del C. Gefe político de 13 de Agosto del presente año, por la que previno que suspendiera sus procedimientos el C. Juez menor Vicente Aguilar, en el juicio seguido contra Antonio Juarez y Gabino Viveros sobre pago de la cantidad de ocho pesos en que apreciaba un perro que le envenenaron, motivo por que se han violado en su perjuicio las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitucion; el escrito en que se interpone el recurso; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas; lo alegado y cuanto mas que ha sido de verse.

Considerando: que la quejosa apoya su queja en lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitucion, sobre que nadie pueda ser molestado en su persona é intereses sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su procedimiento, cuyo artículo haya infringiéndose por el C. Gefe político al prevenir al C. Juez menor de Paz que suspendiera sus procedimientos en la ejecucion de la sentencia, en virtud de la que fueron condenados los CC. Gabino Viveros, Antonio Juarez y Juan Casimiro el pago de la cantidad de ocho pesos en que apreciaba al perro que mataron suministrándole veneno, cuya Orden se respetara resultando ilusoria la sentencia.

Que ha probádose plenamente por las constancias remitidas por el C. Juez menor de Paz, que el C. Gefe político previno la suspension de sus procedimientos en la ejecucion de la sentencia que pronunció en el juicio á que hace referencia la interesada.

Que al haber sido demandados los CC. Viveros, Juarez y Casimiro, no se escepionaron como debieran, de haber dado muerte al perro por disposicion de la Gefatura política y porque fuera perjudicial, circunstancia porque fueron condenados al pago de la cantidad, objeto de la demanda.

Que al haberse ingerido la autoridad política en negocio de que estaba conociendo la autoridad judicial, atropellando derechos adquiridos, el artículo constitucional invocado favorece á la quejosa, y que no es de pasarse desapercibido el que el C. Juez menor de Paz haya actuado en papel comun, segun consta por el expedientillo que remitió á este Juzgado, circunstancia que hace que haya incurrido en la pena que señala la ley de 14 de Febrero de 1856, en su artículo 55 por haber infringido el artículo 17 en su fraccion 7ª.

Por estas consideraciones, y en atencion á lo dispuesto por el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitucion; se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege á María Joaquina Martinez contra la prevencion del C. Gefe político, de que suspendiera el C. Juez menor la ejecucion de la sentencia en que se condenó á los CC. Gabino Viveros, Antonio Juarez y Juan Casimiro, al pago de la cantidad de ocho pesos en que se estimaba el perro que le envenenaron; y que es de reintegrarse por el C. Juez menor, Vicente Aguilar, el importe del papel del sello tercero en que debió extender la acta del juicio, con mas el duplo, en la administracion del papel sellado, dándose al efecto á la oficina el aviso respectivo. Hágase saber: publíquese esta resolucion en la forma acostumbrada, y remítase el expediente á la Suprema Corte de Justicia para la revision.

El C. Juez de Distrito, definitivamente juzgando, lo proveyó, mandó y firmó.—*Antonio Rivera.*—Ante mí.—*Antonio García Mosqueira.*

Es copia que certifico. Puebla de Zara-

goza, 13 de Noviembre de 1873.—Antonio García Mozqueira, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 21 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Doña Joaquina Martínez, ante el Juzgado de Distrito de Puebla, contra una orden del Gefe político de aquella Ciudad que previno al C. Juez menor Vicente Aguilar, que suspendiera la ejecución de una sentencia que en un juicio civil recayó á favor de la promovente contra los CC. Antonio Juárez y Gabino Viveros. Vista la sentencia del C. Juez de Distrito con lo demás que ver convino, y considerando: que de los autos resulta plenamente probada la existencia de la orden contra la cual se ha entablado el presente recurso, y que con ella se vulnera en la persona de la quejosa la garantía que otorga el artículo 16 de la Constitución federal; con fundamento del referido artículo y de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del C. Juez de Distrito, que declaró: que la Justicia de la Union ampara y protege á la Señora Doña Joaquina Martínez contra la orden del C. Gefe político, que previno al C. Juez menor Vicente Aguilar la suspensión de la ejecución de la sentencia que recayó á favor de aquella.

Devuélvanse los actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José M. Iglesias.—Juan J. de la Garza.—José M. Lozano.—José Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramírez.—M. de Castañeda y Nájera.—J.

M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—Simon Guzman.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Lic. Enrique Landa, secretario.

Es copia que certifico. México,.... de Diciembre de 1873.—Lic. Emilio Ordaz, oficial mayor interino.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de México, por el C. Lic. Remigio Tellez, en representacion de D. Sabino Tellez, contra los procedimientos del Juzgado 2º de lo civil de esta misma Ciudad, en el juicio que sigue con D. Manuel Castillejo sobre pago de una cantidad.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

México, 29 de Noviembre de 1873.—Visto el presente juicio de amparo interpuesto por el C. Lic. Remigio Tellez, en representación de D. Sabino Tellez, á virtud de reputar violada en la persona de este, con los procedimientos del Juzgado 2º civil en el juicio ejecutivo promovido por D. Manuel Castillejo, la garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución; visto el informe del expresado juzgado; lo pedido por la parte fiscal, y visto en fin lo que verso debia. Atendiendo: que la violación en el caso se hace consistir, en el hecho de que habiéndose demandado al quejoso en el año de 1864, y promovido el juicio con arreglo á la ley de 4 de Mayo de 1857, promulgado el Código de procedimientos vigente hoy, al hacerse aplicación de este en la secuela del mismo juicio para efectuar el remate de la finca embargada, se verifica la retroactividad que por el artículo 14 constitucional se prohíbe en la aplicación de las leyes; y Considerando; 1º: que si bien la disposición del artículo constitucional es terminante, y